

LUIS OLARIAGA

LOS EFECTOS DE LA INFLACION MUNDIAL

Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 48, 1971

Los efectos de la inflación mundial

por el Académico de número

Excmo. Sr. D. Luis Olariaga (*)

El concepto de inflación me tocó importarlo en España, en el extinto periódico "El Sol" durante la primera guerra mundial, comentando un artículo que publicaba en la revista inglesa "Economic Journal" el entonces profesor Edgeworth de la Universidad de Oxford, refiriéndose a la elevación de los precios motivada por los incrementos de dinero que los Gobiernos de los países beligerantes se veían obligados a realizar para hacer frente a los gastos de la guerra.

Ese concepto de la inflación de precios considerada exclusivamente del lado de la demanda y motivada por abusos en la creación de dinero, en los que ésta no correspondía a las mercancías o servicios puestos en circulación o en vía de aparición en corto plazo en el mercado, es la que ha venido preocupando hasta hace pocos años a economistas, a financieros y a políticos —incluso a la pública opinión— desde que se sufrieron las tremendas consecuencias que dicha inflación produjo en la primera guerra, en muchas naciones y de modo acusado en varias de las que habían sido beligerantes.

Me viene a las mientes el recuerdo estremecedor de un pobre investigador austríaco, que trajo por compasión, a dar conferencias, nuestra Facultad de Medicina en aquella turbulenta época inflacionista. Era uno de los más notorios hombres de ciencia de su país y había pasado el último invierno refugiado, por falta de recursos, en un vagón de ferrocarril y padeciendo hambre.

(1) Disertación en Junta del 25 de mayo de 1971.

Ahora preocupa también la inflación de demanda, que proviene de gastos excesivos del Estado —sobre todo en obras públicas para encauzar el desarrollo—, mas lo que inquieta preferentemente y se considera más grave y más difícil de controlar es la inflación que emana de la constante elevación de los costes.

Los precios —mejor dicho, el nivel general de los precios— pueden sufrir aumento del lado de la demanda o del lado de los costes de la producción. Por este último concepto puede darse incremento en el precio de las materias primas o en el de los salarios y sueldos, y lo que hoy presiona, justamente, es esta retribución del tiempo de trabajo. Coinciden en apreciarlo así, tanto los gobernantes de los países más adelantados como los economistas y hasta los periódicos. La productividad ha ido decreciendo, por menor esfuerzo de los trabajadores o por apausamiento del desarrollo técnico, y, al mismo tiempo, han ido creciendo el gasto de consumo y el gasto de inversión. En consecuencia, los precios han ido subiendo constantemente y la economía mundial se ha precipitado en la inflación tanto del lado de los costes como del lado de la demanda.

Los precios de los artículos de consumo, que son los que en último término más importan, cuyo índice era 100 en 1963, habían pasado a ser en enero del presente año 123,5 en la Alemania federal, 130,8 en Bélgica, 131,2 en Austria, 134,6 en Francia, 136,3 en Italia, 141,9 en la Gran Bretaña, 143,1 en Suecia, 145,3 en Holanda, 146 en Noruega, y 162,4 en España, según el Boletín Estadístico de las Naciones Unidas.

La inflación como proceso sistemático ascensional de los precios sería un fenómeno francamente favorable para el funcionamiento de la economía capitalista si no tuviera sus complicaciones sociales y su punto crítico para la propia organización económica. La inflación permite un desplazamiento constante de rentas de determinadas clases de la sociedad en favor de otras, y muy especialmente de la clase de empresarios; y como esta clase es la que hace funcionar el mecanismo productor de las organizaciones capitalistas, no sería un factor de perturbación si no tuviese peligrosas consecuencias en la distribución de la renta y si no llevara, a la larga, a un estado de crisis al propio sistema monetario.

La primera y más próxima consecuencia de la inflación es el aspecto social de sus efectos en el reparto de la renta nacional. La inflación supone una redistribución de la renta nacional entre los distintos grupos, según éstos se hallen o no sujetos a rentas fijas y según dispongan de más o menos fuerza social para promover el aumento de sus rentas.

Si el incremento de dinero o de rentas se hiciese uniformemente en todos los grupos sociales, la inflación no suscitaría problema social alguno; pero lo corriente es que en la inflación los incrementos de renta sean parciales y en provecho de determinados grupos sociales, quedando siempre rezagados los restantes.

El grupo privilegiado es el de la mayoría de los productores, pues ellos son los que desatan los procesos de elevación de precios a los cuales ahora se está haciendo referencia y cuyas fuentes modernamente son la política de inversiones y la presión social. La inyección de dinero por el Estado o por los empresarios a quienes se da facilidades durante la inflación comienza por un incremento de la demanda de ciertos productos, la cual se va después difundiendo gradualmente por el resto de la producción. Los constructores y los fabricantes responden, lógicamente, elevando los precios y, tras ellos, los productores de primeras materias hacen lo propio y después los productores que están con ellos relacionados.

Los comerciantes, al observar la tendencia, suben los precios al nivel a que esperan les sean servidos los nuevos pedidos. Al irse extendiendo de este modo la elevación general de precios, los empresarios que la promueven obtienen la ventaja previa de un aumento de sus beneficios y quedan más que compensados desde el primer momento por los efectos que la elevación de precios pueda producir en sus economías particulares. Hay un sector de empresas, sin embargo —como las de transporte, de suministro de gas y electricidad, y otras— que se hallan sometidas a contratos a largo plazo de tarifas fijas y forman excepción en el grupo de empresarios que se benefician con la inflación. Tras la masa de empresarios que se benefician con la inflación vienen los grupos sociales que no se benefician, a veces, pero que pueden ir compensando la elevación de precios mediante el incremento de sus rentas. Lo forman las personas dedicadas a profesiones liberales y los grupos de obreros de mayor fuerza social y política. Tanto unos como otros van a la zaga de la elevación de precios y siempre se hallan temporalmente en situación más desfavorable que antes de comenzar la inflación, pero van procurando resarcirse de la carestía de la vida. Después vienen los restantes obreros, los empleados privados y los empleados públicos —todos los cuales sufren todavía más las consecuencias de la inflación— agrupados según la mayor o menor posibilidad de conseguir la elevación de sus salarios o sueldos. Finalmente, queda el grupo social de los propietarios de fincas, de los poseedores de títulos de renta fija y de los pensionistas, los cuales no pueden o pueden

muy difícilmente y con gran retraso mejorar su renta para compensar los efectos de la elevación de los precios y son los que sufren más duramente las consecuencias de la inflación; como la sufren también en general los acreedores, en beneficio de los deudores.

De modo que la inflación produce un desplazamiento de la capacidad de compra de los perceptores de renta fija y de la masa general de asalariados, que no pueden defenderse a tiempo de la carestía, en favor de los productores, e implica, por consiguiente, un proceso enorme de desplazamiento de capacidad de compra de unos grupos sociales en favor de otros.

Pero la inflación, además, acaba por destruir el sistema monetario y con ello pone en peligro toda la organización económica. Llega un momento en que el proceso de elevación de los precios adquiere carácter acumulativo provocando el incesante crecimiento de los medios de pago e impulsando éstos nuevamente los precios, hasta que el afán de adquirir cada vez más mercancías para obtener un beneficio cierto en sus reventas, y el deseo de producir cada vez en mayor escala para aprovechar la prosperidad en los negocios, de un lado, y del otro la reacción psicológica del público para comprar toda clase de objetos y deshacerse del dinero, incrementa desmesuradamente la demanda y acelera progresivamente la desvaloración del dinero hasta que llega un punto crítico de la inflación en el cual el público acaba por rechazar el dinero nacional y lo sustituye por dinero extranjero o por unidades de cuenta convencionales basadas en índices de precios, o reemplaza el cambio indirecto por el trueque, volviendo a la economía natural.

Lo singular de la inflación presente y lo que da mucho que pensar es que se ha corrido por el mundo entero y que es raro el país que acierte a contenerla. Ya en la década del 40, al desbordarse la alegría presupuestaria de los ministros de Hacienda, deslumbrados por el hechizo multiplicador de los gastos públicos que les brindó la teoría keynesiana, cayeron por un precipicio inflacionista similar, pero de mucha menor envergadura que la que amenazaba, porque contuvo el resbalón un rápido incremento de la productividad —y, por consiguiente de la oferta— merced a la ayuda americana y a la explosión coetánea de la técnica, poniendo a los pueblos en pleno desarrollo y en trance de ayudarse unos a otros con la exportación de factores productivos pagaderos a largo plazo; y, así y todo, se produjo el parón asistencial si bien transitorio— de los Estados Unidos y la incitación a moderar los gastos y ponerlos en equilibrio con las producciones para que la inflación fuera mitigándose.

Y así se llegó, con los organismos financieros de Bretton Woods—el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con sus filiales—y con los organismos políticos comerciales, la O. E. C. E. y el G. A. T. T., al primero de los cuales se encomendó la copiosa distribución de recursos del plan Marshall—a presionar un movimiento general de equilibrio de presupuestos y de nivelación de balanzas de pagos internacionales y se comprometieron los Gobiernos a respetar una disciplina financiera, y, por tanto, de gastos.

El Fondo Monetario debía proveer de recursos monetarios a corto plazo a los países miembros que tuvieran un desnivel en sus balanzas de pagos, pero a condición de que se sometieran a la vigilancia de su política económica por los técnicos del Fondo y siguieran sus instrucciones para recuperar el equilibrio entre sus pagos y sus cobros al exterior. Incluso el Fondo hacía la previsión de que pudieran ser modificadas las paridades monetarias, aunque ateniéndose siempre a determinadas condiciones de fiscalización. Por su parte, el Banco mundial habría de suministrar capitales a largo plazo para facilitar la reconstrucción de los países quebrantados por la guerra y para fomentar la riqueza en los países subdesarrollados.

Lo que pasa es que ambas instituciones fueron rebasadas en sus medios previstos, por el ardoroso afán de progreso que brotó en todos los Continentes y por el ansia de mejora material inmediata e importante que fermentó en las masas y produjo la natural inquietud en los gobernantes.

Los Estados Unidos lanzaron ayuda masiva a Europa con el plan Marshall, a América, a Asia, a todas partes, para contener la fuerza expansiva de la Unión Soviética, y luego Alemania, Inglaterra, Francia, todos los grandes países industriales, fueron requeridos para prestar ayudas similares, procurando la creación de un ambiente de solidaridad internacional y de auxilio de países ricos a países pobres; ayuda que determinó un fuerte desplazamiento de capitales, principalmente de los Estados Unidos, a través del cauce político y del cauce privado y sin las exigencias disciplinarias que estableció el espíritu de Bretton Woods.

Todo ese torrente crediticio internacional que hizo posible considerables avances de producción y más considerables todavía de consumo, alteraron profundamente las balanzas de pagos en los países prestadores por ir más lejos en sus concesiones de lo que permitían sus cargas tributarias o sus reservas monetarias internacionales —digamos con precisión en los Estados Unidos— y en los países prestatarios, por excederse en sus gastos de los que podían soportar su comercio exterior y

las ayudas de otras naciones. Pudo fluir con abundancia mientras se mantuvo el crédito que a su vez la generalidad de los mercados abrían a los Estados Unidos y a Inglaterra, al aceptar dólares y libras como monedas de reserva, pero cuando las libras empezaron a ser cambiadas por oro por sus tenedores extranjeros, y más tarde aconteció lo mismo a los dólares, apareció la crisis monetaria internacional.

Y las instituciones de Bretton Woods carecían de recursos adecuados para hacer frente a tales crisis: ni contaban con recursos de liquidez apropiados para facilitar los créditos ni tenían autoridad para sujetar a las políticas económicas a desenvolverse dentro de los límites que imponían las balanzas de pagos.

Esto explica la serie de sucesivas reuniones, unas veces de Gobernadores de Bancos Centrales y otras de dichos Gobernadores y de Ministros de Hacienda o de Economía de los diez principales países —con presencia de representantes del Fondo Monetario y del Banco Mundial—, en Londres, en Río de Janeiro, en Estocolmo, en Washington, en La Haya, en Basilea y en Bruselas; y que paralelamente hicieran estudios grupos de técnicos, capitaneados primero por Roosa, después por Ossola y, finalmente, por Emminger.

En todas esas discusiones se manifestó constantemente una división de opiniones entre el grupo de países anglosajones y el de los europeos excluyendo a Inglaterra; siendo los primeros partidarios de mantener el actual sistema monetario y los segundos de modificarlo, para evitar que Estados Unidos e Inglaterra continuasen disfrutando del privilegio de seguir lanzando monedas de reserva en beneficio propio y complicando al mundo con los desequilibrios de sus balanzas de pagos. Los problemas de la alteración del precio del oro, y de dar flexibilidad a las paridades monetarias y de la especulación han venido considerándose importantes, pero secundarios.

La crisis de liquidez monetaria internacional apareció cuando Inglaterra y Estados Unidos —emisores de monedas de reserva— dejaron de disfrutar de una firme confianza para algunos tenedores extranjeros, Bancos Centrales por lo común, que venían recibiendo libras o dólares en pago de los saldos deficitarios de las balanzas de pagos de aquéllos y empezaron a convertir en oro las reservas de divisas entre 1959 y 1961.

En economía, crédito no es sino cambio de un bien presente por otro futuro, y naciones deudoras que no avanzan en su producción lo suficiente para sufragar sus gastos y persisten en balanzas de pagos con déficit hacen desconfiar de que, a la larga, vayan a poder cumplir sus

obligaciones, y a los poseedores extranjeros de reservas en sus monedas les incitan a cubrirse de tales riesgos.

En 1959, los países del continente europeo, especialmente Francia, buscaron refugio en el oro y fueron desembarazándose de libras y de dólares. Estados Unidos perdió oro por un importe de 1.070 millones de dólares en 1959 y de 1.700 millones en 1960, continuando el aumento hasta ascender a 4.000 millones en 1967. Inglaterra y Estados Unidos no pudieron resistir la presión de cambio que les amenazaba y recurrieron al Fondo Monetario Internacional, pero del Fondo no podía brotar el torrente de oro que se necesitaba para atender a las reclamaciones que por todas partes se les hacían.

Así nacieron en 1961 los Acuerdos Generales de Préstamo entre los diez Bancos Centrales de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Suecia, los cuales se comprometían a no seguir reclamando oro y a proveer un suplemento de hasta 6.000 millones de dólares a los recursos del Fondo. Cualquier miembro podría pedir ayuda a otro. Los préstamos devengarían tipos de interés relativamente cortos y serían reembolsados dentro del término de cinco años. En el mismo año, los ocho importantes Bancos Centrales —de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza y Suecia—, a través del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, se comprometieron a abrirse créditos mutuamente para proteger a cualquier moneda que estuviera sometida a presión especulativa; créditos que se tramitarían por medio del citado Banco y serían también de plazo relativamente corto.

En 1962 se adoptó el acuerdo, entre los principales Bancos Centrales, de facilitarse mutuamente operación swap, o sea, dobles —venta al contado y compra a plazo—. En esta forma de préstamos circunstanciales, cualquier Banco Central podía ayudar a otro sobre base bilateral.

Es decir, que hasta la desvalorización de la libra esterlina en 1967 —a la que siguió la de otras valutas—, no se vio claramente que todas estas ayudas crediticias, aunque fueran masivas, no resolvían el problema monetario internacional porque no penetraban en las causas de los desequilibrios que se producían.

Francia venía oponiéndose a tales fórmulas de alivio, que beneficiaban particularmente a las monedas creadoras de reservas, porque suponían el privilegio de saldar déficit de sus balanzas de pagos con su moneda nacional, cuando los demás países tenían que hacerlo con un medio de pago que no podían fabricarlo ellos mismos; porque disponían de una ilimitada libertad de expansión económica y porque les permitía

endeudarse sin dificultad alguna con el extranjero hasta el día en que tuvieran que suspender la convertibilidad en oro de sus monedas. Por tanto, según el criterio francés, el crédito no era el medio apropiado para hacer fluir liquidez internacional.

Hubo que recurrir en 1970 a la creación de un dinero internacional llamado "Derechos especiales de giro", que sería emitido por el Fondo Monetario Internacional. A cada uno de los miembros del Fondo se le asignaría un "Derecho especial de giro" proporcionado a su cuota en el Fondo. Durante 1970 serían emitidos 3.500 millones de dólares y 3.000 en cada uno de los años siguientes. Esta era una solución provisional, por la cual las reservas internacionales estarían constituidas por oro, dólares, créditos del Fondo Monetario y "Derechos especiales de giro".

Sin embargo, siguió la invasión de dólares en Europa, complicándose más todavía con la aparición de los llamados eurodólares, por créditos que se abrían en los Bancos, establecidos en Europa con los depósitos en dicha moneda en ellos existentes. Y arreció la campaña contra el dólar, decidiéndose los seis países del Mercado Común a desconectarse de tal moneda de reserva y estudiar un plan de integración monetaria europea, que desembocara en una moneda propia como fuente de liquidez, independiente del dólar.

De una y otra parte salieron voces clamando por escudriñar la clave política de este perturbador problema que tiene tambaleando el comercio entre todos los ámbitos del planeta, y los ministros del Mercado Común Europeo se hallan desde hace meses al acecho de una Unión Monetaria Europea, que oficie de órgano de coordinación de las políticas económicas y sociales de los países asociados y pueda llegar incluso a crear un ámbito monetario de pago propio y dentro del cual se presten las ayudas transitorias previo enjuiciamiento y aprobación de la comunidad representada por una institución supranacional. El propósito es peliagudo, y para abrirle paso será menester vencer muchos escrúpulos de soberanía y no pocas discrepancias ideológicas, pero apunta al foco neurálgico de todo el problema de la posible convivencia estable internacional y, por tanto, centra esas discusiones, que no terminan nunca, en el fundamental objetivo de poner en evidencia que para que los pueblos puedan articularse económicamente y apoyarse con sus capitales y su técnica es indispensable que se atengan concienzudamente a unas normas políticas que impongan intereses comunes.

La idea de que la Unión se acrisole dentro del Mercado Común Europeo facilita su viabilidad, porque en esa zona reducida del globo

hay países bastante homogéneos en situación social, en cultura, en técnica y en directrices políticas, y, en consecuencia, menores baches para establecer contactos, generalizar información, ajustar métodos de producción y unificar la propaganda popular.

En el actual cambio de frente de las preocupaciones de los Bancos centrales del Mercado Común, destacan dos objetivos: enfrentarse con las fuentes de la inflación y del déficit —que varían en naturaleza y cuantía en los distintos países— y cortar la subordinación de su situación monetaria a la de los Estados Unidos de América.

El problema del déficit es bastante peliagudo. Afecta, a la vez, a la marcha de la producción y a sus costes. Si la producción no avanza o no lo hace suficientemente para satisfacer la demanda, hay que recurrir a la importación, con riesgo de desnivelar la balanza de pagos. Si la producción es cara porque se elevan los costes, es más difícil exportar productos y se llega a parecidos resultados. Lo propio ocurre si el ahorro privado no basta para mantener las inversiones que se entiendan políticamente necesarias y se recurre al ahorro forzoso espoleando la creación de dinero y elevando los precios, si la nueva producción no es de artículos consumibles y no es inmediata. En suma, el déficit es muy difícil contrarrestar en períodos de inflación y es preciso penetrar en ese terreno y ponerse de acuerdo para combatir la inflación si ha de hacerse posible la coordinación de las políticas monetarias.

Y lo que es de más trascendencia para el destino del régimen económico en que Occidente se basa, es la seria dificultad en que los Gobiernos tropiezan para contener esa inflación general y progresiva. Los correctivos de que dispone la política monetaria —que es el único arsenal con que pueden contar los Gobiernos urgentemente y sin titubeos— no sirven para el caso de una inflación de costes. La restricción del crédito, en una u otra forma, no hace más que complicar la vida de las empresas y extender el desempleo; por lo contrario, la expansión del crédito es, si las empresas responden y no tienen otros motivos para desconfiar del futuro, atizar el alza de los precios.

Tampoco puede salvar la situación el recurso a las mejoras técnicas porque es lento, insuficiente —incluso en los países menos desarrollados— dada la rapidez con que se encarece la vida y la consiguiente inquietud de la masa de trabajadores; sin contar con que la ayuda extranjera suele ser imprescindible y va haciéndose impracticable, dada la situación de los países a los que se considera ricos.

Lo más lógico sería buscar la solución en la reducción del consumo, así del público como del privado. La del público es más factible, si bien

con no pocos tropiezos políticos; pero la del privado es, a la hora presente, prácticamente imposible. La parte más importante de los consumidores, que es la sindicada, se resiste y desatiende a sus jefes cuando éstos invocan el interés general.

El ejemplo lo tenemos casi en todas las naciones, pero más significativamente en las luchas por la compensación del alza de precios del té, de la cerveza, de la gasolina, de los licores, cuando en Inglaterra el Gobierno laborista recargó varios tributos para contraer el consumo de esos artículos menos indispensables para vivir; conflictos que han caído de plano sobre el Gobierno conservador que ha recogido la herencia de huelgas que por el momento se habían contenido.

Es decir, que no se vislumbra, por ahora, otro camino anti-inflacionista que el de recurrir a una política de acercamiento de trabajadores y de empresarios, bajo tutela gubernamental y sobre la base de aclarar las exigencias de la coyuntura económica de las naciones y de las condiciones concretas y prudenciales en que puede trabajar cada empresa, tomando en cuenta sus riesgos y perspectivas. Esta orientación, la política de precios y rentas, es ya abogada por financieros de gran responsabilidad como el Presidente del Barclays, primer Banco de Inglaterra, y el ex Presidente de la Reserva Federal, Mr. Hayes, en los Estados Unidos; países ambos de empresariado refractario a intromisiones oficiales en la esfera de los negocios privados. Se han hecho esfuerzos recientemente en los mismos en tal sentido, especialmente en Inglaterra, sin resultado práctico. Cuando a pesar de eso, financieros ingleses postulan tal método de apaciguamiento, es porque no ven otro y el empresariado está resuelto a llevar al máximo sus sacrificios.

Hay economistas y especialmente el profesor danés Max Kjaer Hansen, que sostienen que en ciertos países económicamente desarrollados está llegando a un punto de saturación el consumo que ahora intranquiliza y que es el mayor estímulo para la inflación. A su juicio, el mercado americano brinda una prueba bastante clara de esta afirmación. Así, con respecto a la mayoría de los más importantes bienes de consumo duradero, se afirma que se ha alcanzado un umbral en el que existe una fuerte resistencia, cuando no un límite absoluto, a los nuevos aumentos del consumo total, cuando la frecuencia de utilización de determinado artículo se aproxima a un 100 por 100. Parece ser que esto es especialmente cierto con respecto a bienes tales como automóviles, radios, aparatos de televisión y lavadoras eléctricas; y muy en breve regirá igualmente con respecto a refrigeradores eléctricos, aspiradoras, etc. Se considera que las futuras ventas de estos artículos habrán

de basarse principalmente en las necesidades de reposición, como consecuencia del desgaste por el uso. Se dice que una serie de industrias en los Estados Unidos ya tropieza con este problema.

Kjaer Hansen parece querer decir que a un plazo algo más largo, los bienes de consumo duradero se moverán en Norteamérica por una curva en forma de "S". En Europa Occidental todavía nos encontramos, ciertamente, en la parte más pronunciadamente ascendente de la curva, debido a que el crecimiento de las rentas reales, junto con la igualación de los ingresos, no ha contado todavía con tiempo suficiente para elevar a la masa general de los consumidores al nivel en el que pueden ser satisfechas simultáneamente la mayoría de estas necesidades de bienes de consumo duraderos. En los Estados Unidos, sin embargo, se está alcanzando rápidamente la parte horizontal de la curva, y es posible que a nosotros en la Europa Occidental no nos falte mucho trecho para recorrer.

La conclusión de esta argumentación indudablemente quiere ser que en conjunto nos estamos acercando al punto de saturación y al límite máximo del incremento del consumo —con las inevitables consecuencias que para la producción supone semejante estancamiento de la demanda.

La teoría de la saturación del consumo, sin embargo, ha sido refutada con evidente lógica por otros economistas. En la revista del Skandinaviska Banken, de Estocolmo, publicó un trabajo sobre el tema bastante ilustrativo, el economista sueco Ulbrich Herz. En él pone de relieve varios supuestos; uno de ellos es la probable tendencia a la reducción del período de uso de los bienes de consumo, singularmente de los duraderos. La gente no está dispuesta a dedicar sus ratos de ocio a las conservaciones y reparaciones, y, a medida que resulte más difícil encontrar mano de obra para que le preste su servicio, preferirá comprar otros. Esto viene ya ocurriendo en las sociedades opulentas como Estados Unidos, con la lencería, mantelerías, vajillas, cristalerías, incluso con los muebles, que antes se procuraba durasen toda la vida. Los propios automóviles se compran sin pensar en su posible duración sino en el precio de la reventa al cabo de un par de años de uso.

Tampoco es verosímil que se detenga el consumo en el disfrute de una unidad por familia. La familia con dos coches es una realidad en el típico suburbio norteamericano, donde se aloja una parte creciente de la población. El tercer coche, el coche para los hijos jóvenes, ya está en camino. Se va multiplicando la necesidad de viviendas. Buena parte de las familias en Estados Unidos posee una segunda vivienda —un chalet de deportes, un hotelito para los fines de semana— y no está

lejos de lo posible, dada la distancia entre el lugar de trabajo en la ciudad y el suburbio en que se reside, un pequeño apartamento en el centro de la ciudad para pasar la noche con motivo de las horas extraordinarias de trabajo, las fiestas nocturnas, etc.

Y no se diga del desplazamiento, de la demanda de bienes hacia la de servicios, paralelamente a la elevación del nivel de vida. Los gastos de viaje, de diversiones, de educación no tienen límites. Y a todo ello hay que añadir el problema del incesante nuevo consumo por exigencias del equilibrio social, a que se refiere el profesor norteamericano Galbraith, en su obra "La Sociedad opulenta", pues al ritmo de gasto de carácter privado se ha sacrificado el de naturaleza pública. Un aumento en el consumo de automóviles —escribe Galbraith— exige las correspondientes facilidades en calles, carreteras, señalización y espacio de estacionamiento. También habrá que disponer de los servicios protectores de la policía urbana y de carretera, así como de los hospitales. Aunque en este caso es completamente evidente la necesidad de que exista un equilibrio, nuestro empleo de vehículos privados ha excedido algunas veces del suministro de los servicios públicos consiguientes. El resultado obtenido ha sido un extraordinario congestionamiento de las carreteras, una matanza anual de proporciones increíbles y la colitis crónica de las ciudades. Lo mismo que ocurre en la superficie terrestre, sucede en el aire. Los aviones son objeto de interminables retrasos o chocan, ocasionando desagradables consecuencias para los pasajeros, cuando las disponibilidades públicas para el control del tráfico aéreo no se mantienen al mismo ritmo del empleo privado de las rutas aéreas.

Análogas necesidades públicas se están sintiendo en materia de sanidad, de educación, de previsión social, de investigación, de seguridad.

En fin, que no puede esperarse una saturación del consumo privado y a que se atienda debidamente a los imprescindibles gastos públicos, ni en los países considerados opulentos; y puede imaginarse a qué distancia están de dicha saturación la mayor parte de los pueblos del planeta.

El caso es que con el ansia de mejoramiento material que viene arrollando todo linaje de consideraciones y que viene agudizando el coste de vivir, la política se vino haciendo cada día más difícil de conducir y alentó el señuelo de anticipar el disfrute de un superior nivel de vida material y provocó una demanda de bienes a crédito para empezar a saborearlos años o lustros antes de lo que prudentemente podían soportar las rentas ya ganadas. Aparatos electrodomésticos, radios, televisores, automóviles, pisos, turismo, todo lo que representaba no un

gasto normal sino una capitalización previa al incremento general del conjunto de la producción y de la riqueza, fueron convertidos alborozadamente en necesidades poco menos que perentorias y al alcance de todas las fortunas y, en mayor o menor grado, de países alejados de la posibilidad de disponer de las adecuadas rentas consumibles.

La idea era sugestiva y, desde un punto de vista humano indiscutible —suponiendo, claro está, que no sea también humano dejar de hacer lo que no se puede hacer y esperar a que llegue el momento oportuno—, pero no podía menos de acarrear graves inconvenientes y de jalonar ese proceso económico atropellado con dramáticas y cada vez más insolubles situaciones, especialmente en países poco desarrollados, en algunos de los cuales se incitó a vivir por encima de los medios que de momento podrían ofrecerse, en el supuesto de que una mayor productividad permitiría un aumento de retribuciones para liquidar las deudas. Las cosas hay que verlas honradamente como son y no como nosotros quisiéramos que fueran. Carlyle llamó un día a la Economía Política la “Ciencia Lúgubre”, por tener que ocuparse de la humanidad bajo la estrella de la escasez y de tener ilimitadas necesidades y limitados medios con qué satisfacerlas, no pudiendo ofrecerle, en el mejor de los casos, más que la menos melancólica de todas las soluciones melancólicas.

Mas llegó el momento en que ese aumento de productividad que debía restablecer el equilibrio entre producción y gasto no advino y que, por el contrario, se superó el ritmo de fecundidad de la nueva técnica y creció el escollo llamado inflación, no sólo para incrementar el nivel de vida en las naciones en desarrollo, sino también para mantenerlo en las naciones desarrolladas.

Ese es el gran problema económico del mundo actual: que no se produce lo necesario para satisfacer el consumo presente y que incluso se consume una parte de lo que debía ahorrarse para formar el capital que el progreso reclama; que el afán de hacerse rico o de hacerse más rico el que lo es ya, va demasiado deprisa, mientras retrocede la gana de trabajar, y que la religiosa creencia en el poder de la tecnología no marcha al compás de lo que realmente puede esperarse de ella.

Y ese gran problema afecta a la par, a los países capitalistas y a los países socialistas; en los primeros, se barajan créditos y combinaciones financieras interiores y exteriores, para ir saliendo del paso; en los segundos, se hace respetar por la violencia la contracción del consumo, el encarecimiento de la vida: es ejemplo lo ocurrido hace unas semanas en Polonia.

Ya se ha dicho antes que se empieza a buscar la solución en una política de precios y rentas, en una negociación razonada entre la masa sindicada, tanto patronal como obrera y que se busca elevar la política, a nivel internacional, creando una autoridad superior que refuerce las nacionales e imponga mayor respeto a las masas consumidoras haciéndolas sentirse productoras. Si ésa puede ser la solución, el tiempo lo dirá, pero, desde luego, no debe de esperarse que sea rápida. Entretanto, ya tienen entretenimiento políticos y tecnócratas para ir rebuscando fórmulas transitorias. La peor de todas será la de proseguir resignadamente con la inflación, avivando la agitación social y provocando esa injusta y condenable redistribución de la renta, en favor de una parte de la sociedad y a costa de los seres humanos que no tienen fuerza política para mejorar sus rentas fijas y entre los cuales se halla el mayor número de productores de moral, de arte y de ciencia.

Y no hay que olvidar, señores Académicos, que el mayor peligro que representa esa agitación social, y el derribo de empresas que no pueden subir precios —lo cual es secuela de la inflación de costes— es el de desbaratar un sistema económico que, con más o menos defectos, funciona y sustituirlo con un enigma, cuya solución no se halla prevista ni lleva implícito otro material de construcción que el de trabajar menos y consumir más. ¡Por algo llamó Carlyle ciencia lúgubre a la Economía! A lo cual pudo añadir que las consecuencias de no respetarla son mucho más lúgubres todavía.